

INDICE

	Página
165. Determinación del orden del día	222
166. Relaciones de los Miembros de las Naciones Unidas con España (cuestión del aplazamiento del debate)	223
167. Relaciones de los Miembros de las Naciones Unidas con España. Informe de la Primera Comisión	224

Presidente Interino: Sr. V. K. Wellington Koo (China).

165. Determinación del orden del día

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Ayer, antes de levantar la sesión, anuncié que esta mañana iniciáramos la sesión con la elección del sexto miembro del Consejo Económico y Social. Como para elegir ese miembro convendría que hubiera más representantes presentes, propongo diferir dicho punto para más tarde y examinar primeramente la cuestión de España.

Sr. MAKIN (Australia) (*traducido del inglés*): Señor Presidente, en la sesión de ayer tarde se sugirió no sólo que la elección, como Vd. ya lo ha indicado, sería el primer punto que se trataría, sino también que se pasaría a continuación a discutir la cuestión del veto. Naturalmente, las delegaciones están dispuestas a iniciar ese debate, pero respecto de la cuestión que Vd. acaba de señalar como primer punto que debe tratarse esta mañana, la situación es bastante difícil, por cuanto, como Vd. bien sabe, las delegaciones tienen a algunos de sus miembros ocupados en otros trabajos de las Comisiones. Por lo tanto, no nos es fácil, en tan poco tiempo tomar disposiciones para que asista a la sesión el miembro de la delegación más calificado para dar un consejo o expresar una opinión sobre el asunto.

Por consiguiente, le solicito que se haga cargo de la dificultad que existe para iniciar de improviso un debate sobre una cuestión de ese género.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): El representante de Australia ha estado en lo cierto al decir que se anunció que la cuestión del veto sería aplazada para la sesión de esta mañana. Sin embargo, ciertas delegaciones han solicitado posteriormente que la cuestión sea diferida nuevamente — si esto merecía la aprobación general de la Asamblea — porque deseaban participar en el debate. Esa es la razón por la cual hice esta sugerencia.

Propongo que se pase a discutir la cuestión de España, sobre la cual varios representantes han solicitado ya la palabra. Tan pronto como hayamos terminado con dicha cuestión, pasaremos a la del veto.

Sr. MAKIN (Australia) (*traducido del inglés*): Acepto, señor Presidente.

Sr. ZULOAGA (Venezuela) (*traducido del francés*): Creo que el primer orador inscrito para hablar sobre la cuestión española es el representante de Venezuela. Ahora bien, el Jefe de mi delegación no ha llegado todavía. Como el representante de Australia, pienso que quizá podríamos comenzar con la elección del sexto miembro del Consejo Económico y Social; los minutos así

utilizados nos permitirían esperar la llegada de los oradores inscritos para hablar sobre la cuestión de España.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Según entendí, el representante de Australia ha dicho que, si es posible, deberíamos discutir primero la cuestión del veto. Entendí también que la explicación dada por la Presidencia fué aceptada por el representante de Australia.

En cuanto a la elección, anuncié al comienzo de este debate que, como el número de miembros presentes es demasiado reducido para poder celebrarla, deberíamos diferirla para un poco más tarde.

En lo concerniente a la cuestión de España que nos proponemos pasar ahora a examinar, daré ante todo la palabra al Vicepresidente de la Primera Comisión, ya que el Relator no está presente, y después a algunos de los oradores inscritos en mi lista. Habrá tiempo suficiente para que el Jefe de la delegación de Venezuela llegue y tome la palabra.

Sr. MARTIN (Canadá) (*traducido del inglés*): No me opongo a que pasemos ahora a discutir la cuestión de España, pero quisiera señalar, como lo ha hecho el representante de Australia, que hasta esta mañana al llegar aquí no fuimos informados de que discutiríamos esa cuestión. Repito, en nombre de mi delegación, que no me opongo a que se discuta ahora la cuestión de España. Sin embargo, no desearía que se hiciera, a menos que quede perfectamente establecido que ciertos países, como el mío, que quizá ahora están en condiciones de definir plenamente su posición respecto de la situación actual en España, pero que pueden desear hacerlo, podrán ejercer ese derecho aun en el caso de que hagan uso de la palabra todos los oradores inscritos.

Deseamos hacer una declaración respecto de la cuestión de España, pero no nos encontramos en condiciones de formularla esta mañana. Podremos, quizá, hacerlo un poco más tarde, durante la mañana. Pero en el caso de que así no ocurra, no creo, en vista de que no se nos comunicó el cambio del orden del día, que debamos ser impedidos de hacer una declaración antes de que la Asamblea tome una decisión definitiva sobre la cuestión de España.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): El cambio en el programa ha sido sugerido solamente con el deseo de economizar tiempo, puesto que nos aproximamos al fin de nuestros trabajos. Puedo asegurar al representante del Canadá que el deseo de su delegación de hablar sobre la cuestión de España será satisfecho plenamente, como también los deseos de otros representantes que

quieran también tomar la palabra sobre ese asunto. En realidad, tengo ya una lista de cerca de diez oradores. Por lo tanto, si todos están de acuerdo, pasaremos a examinar esta cuestión.

166. Relaciones de los Miembros de las Naciones Unidas con España (cuestión del aplazamiento del debate)

El Sr. BECH (Luxemburgo), Vicepresidente de la Primera Comisión, *da lectura a la resolución aprobada por la Comisión* (Anexo 70).

El Sr. LANGE (Polonia) (*traducido del inglés*): Creo que los mismos argumentos que se hicieron valer para diferir la elección del sexto miembro del Consejo Económico y Social o la discusión de la cuestión del veto, son aplicables a la discusión de la cuestión de las relaciones de España con las Naciones Unidas, ya que la mitad de las delegaciones, por lo menos, está ausente.

En nuestro orden del día figuran numerosas cuestiones de carácter técnico, y me pregunto si no sería preferible tratar ante todo esas cuestiones y dar tiempo a las delegaciones para que estén representadas en mayor número en la Asamblea.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Según lo entiende la Presidencia, la proposición de la delegación de Polonia se encamina a aplazar la discusión de la cuestión de España, porque el número de las delegaciones presentes no es tan grande como podría ser. Sin embargo, se me ha informado que están presentes los representantes de 42 delegaciones, o sea más de los dos tercios de la Asamblea. Por lo tanto, a menos que el representante de Polonia desee presentar una moción formal de aplazamiento, pasaremos a tratar la cuestión de España.

En vista de la conveniencia de economizar tanto como sea posible el tiempo de la Asamblea, la Presidencia espera que el representante de Polonia no insistirá en su sugestión.

Sr. STOLK (Venezuela) (*traducido del inglés*): En nombre de la delegación de Venezuela, deseo apoyar la propuesta del representante de Polonia de que esta cuestión sea tratada esta tarde. Quisiera que se sometiera a votación esta proposición.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Con arreglo al reglamento, una moción de aplazamiento tiene precedencia, y debo consultar a la Asamblea. Sin embargo, creo entender que se trata no de aplazar la sesión, sino simplemente de aplazar la discusión de la cuestión de España. Se ha hecho una moción de aplazar el debate de la cuestión española, moción que ha sido apoyada. ¿Desea alguno de los representantes hablar sobre el aplazamiento? De lo contrario, la Presidencia someterá la moción a votación.

El Sr. MARTIN (Canadá) (*traducido del inglés*): Señor Presidente ¿no sería posible hacer lo que Vd. sugirió a la Asamblea en respuesta a mis observaciones, esto es, que los oradores tomen la palabra pero que no se someta la cuestión a votación mientras las delegaciones no estén suficientemente representadas en la Asamblea?

Sr. LANGE (Polonia) (*traducido del inglés*): La proposición del representante del Canadá me parece perfectamente aceptable.

Sr. STOLK (Venezuela): En nombre de la delegación de Venezuela, insisto en que se aplace la

discusión del asunto español para la tarde. Creo yo que es preferible hacerlo de esta manera, porque me permito pensar que las palabras que pronunciarán aquí los representantes de las diversas delegaciones tendrán una influencia decisiva en la votación que se efectuará esta tarde sobre la resolución aprobada en la Comisión Política y de Seguridad. Al formular esta proposición me permito recordar que existe ya un precedente en anteriores reuniones de la Asamblea, en que se ha aplazado la discusión de asuntos importantes para la sesión subsiguiente, a fin de que todas las delegaciones estén presentes en la sala, y puedan asumir en la Asamblea una responsabilidad y tomar una decisión, después de oír a todos los oradores inscritos en el orden del día.

Sr. NIETO DEL RÍO (Chile) (*traducido del inglés*): Apoyo la proposición de la delegación de Venezuela.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): La Presidencia entiende que el representante de Polonia aprueba la sugestión del representante del Canadá según la cual, como la Presidencia lo sugirió primero, deberíamos escuchar a los oradores que han solicitado hablar sobre la cuestión de España, pero no proceder a la votación hasta que los miembros concurren en mayor número a la sesión.

Permítaseme recordar que hace un momento anuncié que estaban presentes 42 delegaciones. Ahora están representadas cuatro delegaciones más. Por lo tanto, de 54 delegaciones, 46 están representadas aquí. En vista de ello, me pregunto si el representante de Venezuela desea mantener su moción encaminada a aplazar esta cuestión.

Sr. STOLK (Venezuela): Señor Presidente: Respetuosamente me permito insistir en la proposición que acabo de formular. Para ello, voy a invocar que al comenzar esta reunión se aplazó la discusión del asunto del veto para esta tarde, por considerar que es una cuestión importante; a juicio de la delegación de Venezuela, la discusión de la resolución relativa al caso español, aprobada en la Comisión Política y de Seguridad, es de mucha mayor trascendencia que la relativa a la cuestión del veto, o sea la aplicación del Artículo 27 de la Carta. Por lo tanto, ruego a la Presidencia se sirva someter a votación la proposición que he formulado, apoyada por el representante de Chile, y si el voto de la Asamblea favorece la posición que ha asumido la delegación de Venezuela, que se pase a discutir en la reunión de esta mañana los otros puntos del orden del día, que no tienen la trascendencia e importancia de las resoluciones sobre el veto y sobre el caso español.

Sr. CASTRO (El Salvador) (*traducido del inglés*): La delegación de El Salvador se opone a la moción de aplazamiento presentada por la delegación de Venezuela.

Las razones son perfectamente claras. El Presidente las ha expresado precisa y categóricamente. Están presentes en esta sesión 46 delegaciones y sólo están ausentes ocho. Ahora bien, estamos casi al final de nuestros trabajos y es muy dudoso que se pueda contar permanentemente en la Asamblea con 54 delegaciones. La aprobación de la proposición del representante de Venezuela significaría únicamente retardar el examen de una importante cuestión. El representante de Venezuela ha declarado que esta sesión es importante y que ese es un motivo para apla-

zar el debate. Nos aproximamos al fin de nuestros trabajos y el hecho de que la cuestión tenga una gran importancia me parece, por el contrario, la razón más poderosa que se puede invocar para rechazar la moción de aplazamiento.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Antes de invitar al siguiente orador a hablar sobre la moción de aplazamiento, deseo señalar a la atención de la Asamblea el artículo 69 del reglamento: "Además del autor de la moción, podrán hablar dos representantes en favor de la moción y dos en contra." Hasta ahora hemos oído únicamente a un orador en contra del aplazamiento, por lo cual la Presidencia sólo podrá autorizar a otro orador para que hable en ese mismo sentido, y a dos oradores para que lo hagan en favor de la moción.

Sr. KAECKENBEECK (Bélgica) (*traducido del francés*): Creo poder hacer una proposición de transacción, en la esperanza de ganar tiempo. El orden del día contiene una cantidad de cuestiones de carácter más bien técnico que quizás podríamos examinar ahora. La discusión sobre la cuestión de España sería así aplazada hasta que se hubiera terminado la discusión de esas cuestiones técnicas. Si comenzamos por las cuestiones que figuran al final del orden del día, se podría dar satisfacción a las delegaciones que han propuesto el aplazamiento, sin por eso hacer perder el tiempo a la Asamblea.

Sr. STOLK (Venezuela): Estoy de acuerdo con la sugestión del representante de Bélgica.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): La moción inicial iba encaminada al aplazamiento no de la sesión, sino del debate sobre la cuestión de España.

Sr. BELT (Cuba): Tres delegados han hablado pidiendo el aplazamiento del debate y sólo uno ha hablado en contra de la moción para aplazar el debate. Pido que se ponga a discusión la moción presentada y que no se pierda más tiempo. Que se ponga a votación si la Asamblea desea o no aplazar el debate, y que se cierre completamente la discusión sobre esta materia.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): En virtud del artículo 69, el autor de la moción no debe ser contado entre los tres oradores. Por lo tanto, hemos escuchado solamente a dos. ¿Desea el representante de Yugoslavia hablar en contra de la moción de aplazamiento?

Sr. BEBLER (Yugoeslavia) (*traducido del francés*): No creo, señor Presidente, que sea necesario discutir mucho tiempo sobre ese punto, ni someter a votación la cuestión de aplazamiento.

El orden del día contiene ciertos puntos cuyo orden puede alterarse. Podríamos comenzar por el final del orden del día o discutir primero las cuestiones que figuran en el medio. Hemos diferido esta mañana la cuestión de la elección de un miembro del Consejo Económico y Social sin votar por eso sobre el aplazamiento. Algunas delegaciones desearían que se aplazara para esta tarde la discusión de algunas cuestiones en tanto que no ven ningún inconveniente en que algunas otras sean examinadas esta mañana. Observo, en particular, una cuestión relativa al "traspaso a las Naciones Unidas de ciertas funciones y actividades no políticas de la Sociedad de las Naciones". Podríamos comenzar por ese punto, sin entrar en una prolongada discusión, ni poner a votación la moción de aplazamiento.

En consecuencia, solicito del Presidente que trate de encontrar el medio de evitar toda discusión sobre esta cuestión, y proponer que se trate un punto cuyo examen inmediato no suscite ninguna objeción.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Como dos oradores han hablado en contra de la moción de aplazamiento del debate sobre la cuestión de España, la Presidencia tendrá que averiguar cuál es la opinión de la Asamblea poniendo la cuestión a votación. A menos que los que se han pronunciado contra el aplazamiento lo acepten ahora, pondré la cuestión a votación.

Sr. BELT (Cuba): Eso es, precisamente, lo que yo quería pedir a la Presidencia: que se ponga a votación si se aplaza o no el debate.

Sr. KAECKENBEECK (Bélgica) (*traducido del francés*): Deseo solicitar una aclaración. Se han presentado varias proposiciones de aplazamiento; algunas solicitan que el debate sobre la cuestión de España sea aplazado para esta tarde. Yo he hecho la proposición de transacción, apoyada por los representantes de Venezuela y de Yugoslavia, de aplazar este debate hasta que se hayan discutido los demás puntos del orden del día. Solicito del Presidente que al someter la cuestión a votación precise de qué aplazamiento se trata.

Sr. CASTRO (El Salvador) (*traducido del inglés*): Una cuestión de orden, señor Presidente. Cuando se presenta una moción de aplazamiento, solamente podrán hablar dos oradores en favor de ella y dos en contra. Eso ha sido hecho ya. No se ha fijado fecha; se trata de un simple aplazamiento. Por lo tanto, estimo que Vd. debería decidir que se someta la cuestión a votación inmediatamente, sin permitir a los demás oradores que expresen su opinión.

Sr. STOLK (Venezuela): Señor Presidente: Me veo en la obligación de volver a tomar la palabra para aclarar ante la Asamblea la proposición que originalmente hiciera en nombre de la delegación de Venezuela. No he nunca en mi mente pedir a la Asamblea el aplazamiento del debate de la sesión de esta mañana, sino, únicamente, que la discusión del caso español se diferiera para la tarde y que continuáramos ahora nuestro trabajo discutiendo los puntos menos importantes del orden del día. Es decir, que se haga con la resolución relativa al caso español lo mismo que se hizo con el proyecto de resolución sobre el asunto del veto, tal como lo ha interpretado y explicado el representante de Bélgica.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Someto a votación la propuesta de aplazamiento del debate sobre la cuestión de España.

Decisión: La propuesta de aplazamiento queda rechazada por 21 votos contra 18.

167. Relaciones de los Miembros de las Naciones Unidas con España. Informe de la Primera Comisión (documento A/241)

Sr. STOLK (Venezuela): Señor Presidente: El delegado de Venezuela siempre está dispuesto a tomar la palabra, pero como ha insistido en que este asunto sea discutido esta tarde, pide respetuosamente a la Presidencia que le conceda el privilegio de no hablar ahora, sino esta tarde.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el Sr. Nieto del Río, representante de Chile.

SR. NIETO DEL RÍO (Chile) (*traducido del inglés*): Después del animado debate sostenido en la Comisión Política y de Seguridad y en la Subcomisión competente, esta Asamblea debe pronunciarse ahora sobre el proyecto de recomendación relativo a la cuestión de España que tiene a consideración.

Este documento, fruto de los debates de la Primera Comisión, señala una etapa memorable en la evolución de este problema. No contiene todo lo que nosotros hubiéramos deseado; sin embargo, estamos seguros de que el pueblo español lo acogerá favorablemente como una prueba de que la mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas apoyan a los españoles en su ferviente anhelo de libertad.

La historia de este problema es a la vez larga y dolorosa; tan larga y tan dolorosa que muchos pueblos y gobiernos, pensando sólo en su propia lasitud, su bienestar y su conveniencia, prefieren ignorarla. Otros la han olvidado. Tenemos de esto una prueba evidente: cuando se habla de la manera en que se instauró el régimen de Franco se vela la cuestión con una espesa niebla, a fin de ocultar todo lo que ese régimen tiene de malo y que lo hace sospechoso ante la conciencia del mundo. Es humano olvidar y pasar del olvido a la ignorancia y de la ignorancia a la quietud. De aquí el proverbio: "Una conciencia tranquila es algunas veces producto de una mala memoria."

Sin embargo, existen varios tipos de personas olvidadizas. El menos recomendable es el de las personas que olvidan por razones de conveniencia personal, por falta de generosidad moral, por pereza, cosa muy frecuente en materia de política internacional. El fenómeno del olvido, tanto real como simulado, se manifiesta de muchas maneras cuando se trata de los acontecimientos de España. El dictador de Madrid saca partido de esos olvidos, pues sabe emplearlos hábilmente para consolidar su régimen.

El olvido permite a numerosas personas sostener que la revolución española fué meramente una conmoción interna, lo que en derecho público se denomina guerra civil. Hacen caso omiso del hecho principal y decisivo, que quita a esta conmoción el carácter de una guerra civil: intervención extranjera, intervención política, diplomática, financiera y militar, premeditada y puesta en ejecución: la pública y notoria intervención de las Potencias del Eje que fueron a España para ensayar la *blitzkrieg* y más tarde, con la ayuda de sus protegidos españoles, desencadenaron la más grande catástrofe que el mundo haya jamás conocido. Esas Potencias están hoy en ruinas y los pueblos de Alemania e Italia expían, en la miseria y el sufrimiento, las culpas de sus amos. Mientras tanto, un aliado efectivo de éstos: los hijos de esos mismos dictadores, encuentran protección política y jurídica en importantes Miembros de las Naciones Unidas; los mismos Miembros que condenaron el régimen de Franco en San Francisco, Potsdam y Londres y en el preámbulo de la resolución que está ahora a consideración de la Asamblea.

Muchos de aquellos que firmaron de su propia mano, como lo hice yo mismo, los acuerdos interamericanos que condenan la intervención, se opo-

nen ahora a la adopción de medidas encaminadas a eliminar los resultados de esa intervención descarada que son bien reales y constituyen para nosotros un reto. Esas personas han olvidado, o desean olvidar, que esta intervención existió y que sus autores han sido aplastados por la coalición de los pueblos de todo el mundo. "Oh, no" — dicen — "no podemos intervenir en los asuntos internos de España". ¿Pero quién ha solicitado que intervengamos en los asuntos internos de España? Lo que decimos es que España ha sufrido una intervención extranjera y que su régimen actual, aliado de las Potencias que han perpetrado esa intervención, ha sido establecido por éstas. Decimos que es necesario ayudar al pueblo español a restablecer su libertad y sus derechos, que fueron abolidos a consecuencia de la intervención germanoitaliana. Por esta razón y porque el régimen franquista fué un aliado de nuestros enemigos, solicitamos que las Naciones Unidas ayuden al pueblo español y rompan las relaciones diplomáticas establecidas en una hora funesta.

¿Donde está la violación de nuestro principio fundamental de no intervención? Ningún argumento válido podría ser invocado por los juristas para reclamar la inmunidad en favor del hombre que, en su propio país, es el principal cómplice de la intervención extranjera. Un acto de esa naturaleza costó la vida a un rey de Francia. Los ciudadanos mexicanos que, hacia la mitad del siglo XIX, trataron de llevar una intervención europea a su propio país, fueron castigados y todos los que podían hacerlo ayudaron a México a desembarazarse del gobierno impuesto por la intervención extranjera. En esa misma época Chile, aliado de Bolivia y de los patriotas peruanos, impidió la intervención armada de España, declaró la guerra y sufrió el bombardeo inútil de Valparaíso.

¿Cuáles son las razones suficientes que permiten negar que una política colectiva o individual de los Estados Miembros de las Naciones Unidas es legítima, siendo así que la intervención de fuerzas armadas extranjeras en España fué dirigida contra esos mismos Estados? Las medidas propuestas no constituyen "sanciones", en el sentido técnico que les da la Carta, sino una actitud política impuesta por la lógica y la moral, pues el actual régimen de España evoca hechos que siempre han sido considerados como un obstáculo para la armonía internacional.

No defendemos a ningún partido o facción en particular. No estamos aquí para recomendar que el General Franco sea reemplazado por un nuevo Gobierno formado anticipadamente a nuestro gusto, o por un Gobierno *ad hoc* que deseáramos establecer en Madrid para gobernar al pueblo español como lo hicieron Hitler y Mussolini. No tenemos la pretensión de someter a España a nuestros dictados, ni de invitar a ese país a repetir la matanza o entrar una vez más en una serie ininterrumpida de conflictos políticos.

Lo que la delegación de Chile y otras delegaciones han sostenido aquí, y lo que sus Gobiernos también han sostenido, es que en España ha habido una intervención en gran escala. Por ésta y otras graves y bien conocidas razones, las Naciones Unidas están hoy en condiciones de hacer desaparecer los efectos de esa intervención, actuando enérgicamente dentro de los principios de la Carta.

La salud de España exige que se restablezca el equilibrio del país. España posee un Gobierno legítimo en el exilio. Si el pueblo español desea reemplazarlo por otro mediante nuevas elecciones democráticas, que lo haga así tan pronto como las circunstancias lo permitan. A todos nos corresponde el deber de contribuir a crear esas circunstancias favorables adoptando medidas que no constituyan una intervención.

Ni los republicanos ni los monárquicos españoles ni sobre todo, el pueblo español, tolerarán una intervención, aun cuando ésta fuera en su beneficio. No están dispuestos a prostituir el honor de España. Por lo tanto, aquellos que tratan de dividir esta Asamblea en intervencionistas y no intervencionistas no hacen sino ofender a España, ya que los españoles desean que Naciones Unidas adopten una actitud definida. Ayer mismo, el Presidente del Consejo de Ministros de la República Española me dijo que estaba satisfecho con la decisión tomada por mayoría por la Primera Comisión. ¿Alguno de los representantes que votó en contra osaría calificar al Sr. Giral de intervencionista?

Un representante eminente declaró, durante el debate, que aquellos de nosotros que apoyamos una recomendación encaminada a romper las relaciones diplomáticas con el régimen del General Franco, somos intervencionistas, a pesar de nuestras afirmaciones en contrario. Que Franco diga esto, según nos lo informa la prensa, es completamente comprensible. Se comprende igualmente que la muchedumbre que a sus órdenes desfiló por las calles de Madrid haya hecho demostraciones de simpatía frente a las Embajadas de los Gobiernos que están en contra de la ruptura de relaciones. Sin embargo, es lamentable que el argumento de que se sirve Franco sea idéntico al que invocan los Estados que simulan ser en la Asamblea adversarios de esa ruptura.

Quisiera pedir al representante que interpretó equívocamente nuestra posición, quizá a fin de vigorizar la propia, que modere su juicio sobre una actitud que él no está calificado para apreciar en su justo valor.

Si la delegación de Chile quisiera emitir un juicio impremeditado, podría replicar que algunos adversarios de la ruptura con España en el fondo son "franquistas", algo que, sin embargo, no me atrevería a declarar por temor de que se me culpe de descortés, y de dar prueba de mal gusto y mala fe. Otros representantes, mucho más circunspectos, se negaron a votar a favor de la moción de ruptura, alegando que tal ruptura violaría el principio de no intervención. Con esos colegas estamos a lo menos de acuerdo en un punto fundamental: el respeto por ese principio sagrado, del cual todos hemos dado pruebas, aunque de manera distinta. Ellos lo han hecho en teoría y nosotros en la práctica. No olvidemos que en España se ha perpetrado la intervención más astuta, voraz y cruel de los tiempos modernos, ante los ojos de las grandes democracias europeas que la presenciaron pacientemente. Para cumplir lógicamente nuestros principios, deseamos que España logre borrar los efectos de esa intervención.

Ahora que he definido la posición de Chile, quisiera agregar que la presente situación en España impide a la nación española cooperar en la obra internacional de paz y de mantener rela-

ciones culturales, amistosas y comerciales normales con las repúblicas americanas de origen español, que siempre están deseosas de mantener la amistad más estrecha con la nación que es la noble descubridora y la madre del Continente americano.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el Sr. López, representante de Colombia.

Sr. LÓPEZ (Colombia): Sr. Presidente: La cuestión de España llega, por fin, a la consideración de la Asamblea General y en condiciones que me parecen singularmente contradictorias, lo cual no es de extrañar, dados sus muy complejos antecedentes y la difícil naturaleza de la solución que se trata de buscarle.

En esta sala todos estamos de acuerdo en que es deseable y necesario un cambio en las condiciones políticas y sociales de la Península, que le permita a su Gobierno solicitar la buena acogida de esta Organización. En realidad, todo el mundo democrático quiere que las Naciones Unidas hagan un esfuerzo para determinar ese cambio. Yo he creído que el Generalísimo Franco también está convencido, tan convencido como nosotros, de que la bienandanza de España exige que, cualquiera que sea la forma de gobierno que haya de tener en el porvenir, le garantice al pueblo español el pleno ejercicio de las libertades fundamentales. Sin embargo, es notorio el desacuerdo que ha existido y que subsiste entre las Naciones Unidas respecto de las medidas que puedan tomarse con una razonable seguridad de buen éxito para alcanzar ese resultado.

Las discusiones en la Comisión Política, primero, y las que tuvieron lugar después en la Subcomisión nombrada para estudiar una fórmula de acuerdo entre las distintas resoluciones que le fueron presentadas, pusieron de relieve la diversidad de conceptos que reflejan las votaciones que culminaron en la elección del proyecto que aguarda ahora una decisión de este cuerpo. Como se recordará, esta fórmula fué adoptada por 23 votos afirmativos contra 4 negativos y 20 abstenciones. Fueron menos los que decidieron apoyarla en la Comisión Política que los que en una u otra forma se negaron a hacerlo.

Se ha dicho que toda cuestión importante debe ser resuelta por una mayoría de dos tercios. No es esta la ocasión de discutir si así debe ser, o si debemos atenernos a las normas establecidas por la Carta y por nuestros propios reglamentos, o si debe ser de otra manera. Pero sí considero que en asunto de tanta entidad y que interesa tan vivamente a la opinión de todas las Naciones representadas en esta Asamblea, podría alegarse que procedemos con ligereza si no nos detuviéramos a pensar que a esta resolución no la acompaña la confianza de la mayoría en su eficacia; ni tampoco la prestigio como expresión de su voluntad el escaso o ningún entusiasmo con que hasta este momento ha sido aceptada. No hemos visto claro cuál de los varios caminos que se han recomendado es el que debemos seguir y por eso hemos estado tan divididos en nuestras votaciones. No creemos haber encontrado un rumbo seguro, ni podemos ocultar nuestras vacilaciones e incertidumbres.

Laboriosamente hemos llegado a una conclusión, cual es la de que después de que el Consejo de Seguridad convino en remitir el caso de España

a la Asamblea General, la Asamblea no puede devolvérselo sin una recomendación. Y la que vamos a hacer, señor Presidente, termina diciendo que si dentro de un tiempo razonable no han cesado las condiciones que actualmente prevalecen en España, el Consejo de Seguridad deberá estudiar las medidas que considere adecuadas con el fin de remediar esa situación.

Nos hallamos, pues, si no estoy equivocado, ante una nueva contradicción. La gran mayoría de esta Asamblea no es, ni puede ser, partidaria de la intervención de las Naciones Unidas en los asuntos internos de ningún país, sea o no miembro de esta Organización. Si hay en ella partidarios de la intervención, cualquiera que sea el pretexto que se invoque para justificarla, ninguno puede confesarlo. Se lo impide el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta, el cual establece:

“Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII.”

Para no aparecer que nos apartamos manifiestamente de la letra y del espíritu de la Carta, hemos convenido, por lo menos en principio, que no es intervención la que toma una forma indirecta o negativa; vale decir, la acción que puedan ejecutar las Naciones Unidas por recomendación de la Asamblea General, aunque ella entrañe una presión exterior tan fuerte como la amenaza de rompimiento de relaciones diplomáticas o la aplicación de medidas de la naturaleza de las que puede decretar el Consejo de Seguridad para dar fuerza y vigencia a los deseos y propósitos de la Asamblea General.

Pero, señor Presidente, aquí mismo se ha alegado que las Naciones Unidas han aceptado restricciones a su soberanía que no solamente les impiden legislar en contravención a los principios de la Carta, sino que han suscitado ya el grave problema de resolver si deben o no proceder, y cuándo, a poner de acuerdo su legislación con dichos principios.

Ayer, no más, aprobamos una resolución según la cual esta Asamblea es de concepto que el tratamiento que se da a los indios en la Unión Sudafricana debe ajustarse a las obligaciones internacionales estipuladas en los convenios concluidos entre los dos Gobiernos, y a los principios pertinentes de la Carta. Más aun: la Asamblea General decidió solicitar de los Gobiernos de la Unión Sudafricana y de la India que informen a la Asamblea, en su próximo período de sesiones de las medidas que hayan tomado con tal fin.

Con igual derecho, con las mismas razones, basándose en los mismos principios, se podrá proponer que las Naciones Unidas hagan recomendaciones a todos sus Miembros para que modifiquen sus leyes y su organización administrativa de manera que pongan término a toda discriminación racial, y tarde o temprano tendremos que resolver si seguimos por el camino que hemos comenzado a andar, o si, como la delegación de Colombia lo cree indispensable, estudiamos un procedimiento, fijamos plazos, preve-

mos excepciones, para organizar el mundo sobre las nuevas bases que prevé la Carta, o si dejamos que los distintos Estados reformen sus instituciones discrecionalmente, esto es, que las pongan a tono con las prescripciones de la Carta de las Naciones Unidas, cuando lo estimen conveniente, como lo estimen conveniente.

Si no ha de pedírseles a otros Estados que hagan lo mismo que le hemos pedido a la Unión Sudafricana, tememos que surgirá muy pronto la necesidad de revocar el precedente que acabamos de sentar en el caso de las leyes que regulan las actividades de los indios en esa parte del mundo.

No deseamos insinuar que nos está asaltando algún temor acerca de los peligros que el porvenir les pueda reservar a las Naciones pequeñas, una vez sancionado el principio de que la intervención en forma negativa, no es la intervención que ellas unánimemente rechazan y que en el caso de los pueblos hispanoamericanos se encuentra ya, por fortuna, consagrada en varios convenios internacionales de carácter regional. Pero tampoco queremos dejar de decir que consideramos muy importante que se definan oportunamente las nuevas posiciones políticas y jurídicas que vamos tomando al paso que la vida de relación internacional nos mueve a actuar para que hoy un Estado, y otro mañana, y un tercero pasado mañana, se pliegue por exigencia nuestra, directa o indirecta, positiva o negativa, a cambiar de gobierno dentro de un plazo perentorio, so pena de perder sus relaciones normales con las Naciones Unidas y de sufrir las consecuencias de verse excluido de todos sus organismos.

Hoy se trata de España, pero España no es el único país en donde no se respetan todas las libertades fundamentales; ni es el único al cual puede hacerse una invitación semejante para que cambie de gobierno y revise sus instituciones y prácticas políticas en la medida que lo apetezca una mayoría de las Naciones Unidas. Estamos en vía de aplicarle a un Estado que no pertenece a nuestra Organización normas de vida política que todavía no tienen plena vigencia en algunos de los países que la componen.

Pero no me alarma que se principie con España a implantar el nuevo orden de gobierno en el mundo. Lo que me parece inconveniente es que se haga sin dejar bien entendido que por ahí vamos a avanzar. Y si por ahí se trata de dirigir nuestras decisiones, me gustaría agregar que me parecerá mejor aprisa que despacio. No me inquieta la perspectiva de que en la Asamblea General predomine el deseo de imponer universalmente los principios y propósitos que inspiran la Carta. Por el contrario, veo con entusiasmo que en esta segunda parte del primer período de sesiones se haya hecho evidente, no sólo en el caso de España, sino por dos veces en el de la Unión Sudafricana, que no prosperan los esfuerzos por restringir el imperio de esos principios y propósitos ni por prolongar la vigencia de situaciones políticas, administrativas o sociales que chocan abiertamente con ellos.

En Colombia todos los hombres nacen iguales y son iguales ante la ley. Y, por fortuna, constituimos un conglomerado racial armónico que se acomoda fácilmente a las instituciones democráticas, porque todos los colombianos profesamos una misma religión, hablamos un mismo idioma y tenemos un mismo modo de vivir. No somos

una nación poderosa económica o militarmente. No podemos vanagloriarnos de ocupar un puesto de vanguardia en los dominios de la cultura científica. Nuestro desarrollo industrial es muy incipiente. Pero vivimos en paz, vivimos contentos con los progresos que hemos alcanzado, tenemos confianza en nuestro destino, y nos sentimos orgullosos de la tradición civil de la República. No necesitamos hacer ningún esfuerzo para acompañar a las Naciones Unidas en ninguno de sus nobles propósitos.

Para proceder de acuerdo con los principios que han de gobernar los actos de las Naciones Unidas, no tenemos que reformar nuestras leyes, ni alterar nuestras prácticas y costumbres, ni siquiera someternos a la incomodidad que produce en las gentes las reglas extrañas a sus hábitos mentales. Esto explica el que no hayamos recibido con inconformidad, sino con beneplácito, las recomendaciones de la Comisión Política que han llegado al examen de la Asamblea General sobre el tratamiento de la población india en el África del Sur y sobre el problema de España. Dichas recomendaciones se apartan de la letra pero no del espíritu de las que propuso la delegación de Colombia y no fueron aceptadas.

En el primer caso, la delegación de Colombia recomendó que se consultara a la Corte Internacional de Justicia:

a) Si los Miembros de las Naciones Unidas están en la obligación de modificar inmediatamente su legislación interna cuando establezca discriminaciones raciales incompatibles con el texto de la Carta;

b) Si tienen el derecho de expedir en el futuro leyes que establezcan esa discriminación; y,

c) Si tales leyes constituyen o puede alegarse que constituyen asuntos reservados a la jurisdicción interna de los Estados, respecto de los cuales la Asamblea no puede hacer recomendaciones al Estado o Estados interesados, ni al Consejo de Seguridad, ni al Consejo Económico y Social.

La Asamblea General decidió no hacer la consulta a la Corte Internacional de Justicia. Prefirió expresar la opinión de que el tratamiento que se da a la población india en la Unión Sudafricana debe ajustarse a los arreglos celebrados por los dos Gobiernos, y a las disposiciones pertinentes de la Carta. La delegación de Colombia no sólo está conforme con esta opinión de la Asamblea General, sino que estima que ésta ha dado un gran paso en el camino de conseguir el acatamiento de todos sus Miembros a las disposiciones fundamentales de la Carta.

En el caso de España, entendemos que se ha hecho urgente definir si, no obstante las disposiciones del párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta, tan indiscutiblemente contrarias a la intervención de las Naciones Unidas en los asuntos internos de los Estados, sean o no Miembros de la Organización, es posible que ella acuerde formas de intervención directa o negativa, destinadas a producir los mismos efectos que una intervención franca.

Ya sabemos que esta vez se busca que España tenga, dentro de un plazo razonable, un gobierno constituido con el consentimiento de los gobernados, y que se comprometa a respetar la libertad

de palabra, de prensa, de religión y de asociación, para que puedan verificarse en seguida unas elecciones en las que el pueblo español, libre de toda intimidación, violencia o apremio, pueda expresar su voluntad sin restricciones de carácter partidista.

La delegación de Colombia abunda en el deseo de que a la vuelta de pocos meses el pueblo español haya logrado establecer un gobierno que reúna todas esas condiciones, y así podamos tener el gusto de oír la voz de sus representantes en el seno de esta Asamblea.

No niega la delegación de Colombia, ni tiene interés alguno en disputar los hechos que se enumeran en el preámbulo de la resolución adoptada por la Comisión Política acerca de los orígenes, características y actuaciones del Generalísimo Franco; pero desea que si en concepto de la Asamblea General esta resolución no envuelve en ninguna de sus partes una de las intervenciones que le están prohibidas por el párrafo 7 del Artículo 2, quede inequívocamente explicado que la Asamblea General sienta deliberadamente, al aprobarla, un precedente que podrá ser alegado desde mañana para que las Naciones Unidas asuman la misma actitud y formulen análogas prevenciones ante cualquiera de sus Miembros dentro de cuya jurisdicción no haya libertad de palabra, prensa y asociación, o falte el debido respeto a la expresión de la voluntad popular.

La delegación de Colombia solicita con todo respeto la opinión de la Asamblea, porque no cree haber derivado de las deliberaciones a que ha asistido sobre esta grave materia cabal conocimiento de lo que pudiéramos llamar la jurisprudencia a que deberá arreglar su conducta futura en casos similares. Precisamente porque tememos no haber entendido bien las implicaciones de la resolución que estamos discutiendo, la delegación de Colombia ha venido sustentado otra, que tenía en mente la conveniencia de salvar los escollos que hemos señalado en esta larga exposición, aun a riesgo de que muchos de nuestros colegas consideren que he estado abusando inútilmente de su benevolencia para escucharme.

La delegación de Colombia no ha pretendido hacer defensa alguna del Gobierno del Generalísimo Franco, ni ha levantado su voz para darle aliento o estímulo; menos todavía, para que esta Asamblea le ofrezca su colaboración. Personalmente, yo sería el último en olvidar mis antecedentes de liberal militante para acudir en defensa de ideas opuestas a las que he profesado inalterable adhesión durante toda mi vida. Pero ocurre, señor Presidente, que los miembros de la delegación de Colombia no nos sentimos invitados en esta ocasión a expresar principalmente si nos gusta o no nos gusta el régimen del Generalísimo Franco, sino a ayudar a determinar qué providencias pueden tomar las Naciones Unidas, de acuerdo con las disposiciones de su Estatuto Orgánico, para que ese régimen sea substituído por otro que acepte y practique los principios políticos que aspiramos a ver respetados por todos los países del orbe.

Nosotros hemos pensado que, sin perjuicio de reafirmar las declaraciones de San Francisco, Pótsdam y Londres sobre el Gobierno actual de España, y sin perjuicio también de lo establecido en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta, que manda a los miembros de esta Asamblea a abste-

nerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquiera otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, podría explorarse la posibilidad de que el Generalísimo Franco y sus partidarios y amigos estuvieran dispuestos a ayudar a restablecer la convivencia entre los españoles, saliendo así de una situación que, obviamente, no puede prolongarse con provecho para ningún partido o grupo político, ni en beneficio general de España.

Hemos creído, además, que el pleno ejercicio de todas las libertades fundamentales no se alcanzará pacíficamente en esa noble tierra sin que todos los sectores de la opinión española concurren en un gran acto de rectificación nacional a buscar la manera de reconciliarse para vivir en paz y prosperar.

Por tanto, nos hemos inclinado a estudiar y admitir la posibilidad de que el Generalísimo Franco quiera colaborar en la tarea, muy grande por cierto, y llena de atractivos, de reconstruir a España con el apoyo de todos sus hijos, en vez de empeñarse en prolongar los antagonismos que los mantienen divididos, a pesar de los buenos deseos del resto del mundo, y contra su voluntad.

Esta última sería una política diferente de la que han venido desarrollando las Naciones Unidas, y no se nos escapa que en cierto modo invierte la trayectoria de ella, sin separarse de ninguno de sus fines esenciales. Algunos la han juzgado débil porque no tiene acentos de activa beligerancia, ni asomos de actitudes heroicas; pero se inspira en los mismos buenos deseos que

las otras por la libertad y el bienestar del pueblo español, no de una parte de él.

La delegación de Colombia no vaciló en proponer que esta nueva política fuera sometida al contacto con las realidades políticas de la Península; pero debe aceptar y acepta con gusto, la decisión de no ensayarla, tomada por la Comisión Política. No nos da trabajo presumir que debemos estar equivocados cuando son tan pocas las delegaciones dispuestas a secundar nuestra iniciativa y por eso nos limitamos a dejarla sobre la mesa de la Secretaría, sin proponer que sea considerada como una modificación a las recomendaciones ya aceptadas por la Comisión Política. Si la Asamblea General resuelve acoger estas recomendaciones, la delegación de Colombia reitera, desde luego, que entiende que las decisiones de los órganos de las Naciones Unidas las obliga a todas por igual.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Como se hace tarde, propongo la supresión de la interpretación en francés, a menos que la Asamblea General desee escucharla. En todo caso, la traducción francesa será publicada íntegramente en el *Journal* de las Naciones Unidas.

Sr. JOUHAUX (Francia) (*traducido del francés*): Acepto su proposición señor Presidente, como una excepción, porque esta vez he comprendido el discurso del representante de Colombia.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Puedo asegurar al Sr. Jouhaux que hice mi proposición en el sentido que él indica, o sea a título "totalmente excepcional".

Se levanta la sesión a las 13.45 horas.

58a. SESION PLENARIA

Celebrada el jueves 12 de diciembre de 1946, a las 16 horas

INDICE

	Página
168. Relaciones de los Miembros de las Naciones Unidas con España. Informe de la Primera Comisión (<i>continuación</i>)	229

Presidente: Sr. P.-H. SPAAK (Bélgica),
más tarde: Sr. V. K. Wellington Koo (China).

168. Relaciones de los Miembros de las Naciones Unidas con España. Informe de la Primera Comisión (documento A/241) (*continuación*)

El PRESIDENTE (*traducido del francés*): Es absolutamente indispensable que ordenemos la marcha de nuestros trabajos. Hay ya inscritos 21 oradores para tratar la cuestión española, y es probable que se anoten más. La cuestión se ha debatido ya muy extensamente en la Comisión. Casi todos los representantes que solicitan la palabra han expresado su opinión sobre este problema por lo menos una vez. Algunos han expuesto sus puntos de vista dos, tres o cuatro veces, y todo el mundo conoce su posición.

Propongo un método razonable: conceder la palabra a dos oradores para que hablen en favor de la resolución sometida a nuestra consideración y a otros dos para que hablen en contra de la misma; sugiero que los demás representantes

sean autorizados a hablar durante tres o cuatro minutos, como máximo, para explicar su voto.

Propongo también que los discursos que se pronuncien en español se traduzcan unas veces en francés, y otras en inglés. De esta manera podremos terminar nuestros trabajos en un plazo razonable. Me dirijo sobre todo a mis colegas de la América del Sur; hay todavía catorce de ellos que han solicitado hablar sobre esta cuestión que les interesa en particular. Si pensamos discutir la cuestión española con la amplitud que parece indicar el número de oradores inscritos y si nos proponemos seguir el mismo procedimiento con la cuestión del veto, del desarme y de la administración fiduciaria, no se terminarán los trabajos para Navidad, y esto no sería razonable.

Por lo tanto, someto una moción de clausura del debate. No creo que todos los representantes deseen hacer uso de la palabra sobre esta proposición. Dos oradores podrán hablar en contra.